

S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 32
O R D I N A R I A
JUEVES 19 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con cincuenta minutos del jueves diecinueve de marzo de dos mil quince, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza, Eduardo Medina Mora Icaza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alberto Pérez Dayán.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. APROBACIÓN DE ACTAS

Se sometieron a consideración los proyectos de actas de las sesiones públicas números uno solemne conjunta, treinta y uno ordinaria y dos solemne conjunta, celebradas respectivamente el jueves doce y martes diecisiete de marzo del año en curso.

Por unanimidad de once votos, el Tribunal Pleno aprobó dichos proyectos.

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el jueves diecinueve de marzo de dos mil quince:

I. 22/2012

Controversia constitucional 22/2012, promovida por el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, Estado de San Luis Potosí, en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del mencionado Estado, demandando la invalidez del artículo 20 de la Ley de Tránsito del Estado, contenida en el Decreto 759, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el diez de noviembre de dos mil once, así como el oficio SSP/SP/DJ/0230/2012 de trece de febrero de dos mil doce, expedido por el Secretario de Seguridad Pública del Estado. En el proyecto formulado por la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos se propuso: *“PRIMERO. Es procedente pero infundada la controversia constitucional promovida por el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, Estado de San Luis Potosí, en contra de los actos y autoridades precisados en el resultando primero de la presente resolución. SEGUNDO. Se reconoce la validez del Decreto número 759, que contiene la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí, en particular, su artículo 20, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el diez de noviembre de dos mil once, así como la emisión del oficio número SSP/SP/DJ/0230/2012, de trece de febrero de dos mil doce, expedido por el Secretario de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí. TERCERO. Publíquese esta sentencia en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.”*

La señora Ministra ponente Luna Ramos realizó la presentación del asunto. Preciso que la controversia derivó del oficio SSP/SP/DJ/0230/2012 expedido por el Secretario de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, a través del cual le indicó al presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez que no tenía facultades para emitir permisos para circular sin placas y tarjetas de circulación pues, conforme al artículo 20 de la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí, se necesita la firma de un convenio previo con la Secretaría correspondiente.

Modificó el proyecto para suprimir del considerando de las causas de improcedencia lo atinente a que resulta infundada la hecha valer por el Procurador del Estado porque no se toma en cuenta la fecha de publicación del decreto impugnado, sino del conocimiento del oficio que constituye el acto de aplicación, y trasladarlo al considerando de la oportunidad, ello con base en la sugerencia realizada por el señor Ministro Cossío Díaz. Asimismo, modificó el proyecto para agregar algunas tesis y artículos a los considerandos de oportunidad y legitimación, propuestos por el señor Ministro Medina Mora Icaza.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del proyecto contenida en los considerandos primero, segundo, tercero (modificado), cuarto (modificado) y quinto (modificado), relativos, respectivamente, a la competencia, a la certeza de la norma y del acto impugnado, a la oportunidad de la demanda, a la

legitimación activa y a la legitimación pasiva, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Medina Mora Icaza, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

La señora Ministra ponente Luna Ramos realizó la presentación del considerando sexto, relativo a las causas de improcedencia. Indicó que por el traslado de la primera causa de improcedencia al considerando de la oportunidad, restaría determinar que la causa hecha valer por el Procurador del Estado se desestime, pues consiste en un problema sobre la existencia del acto de aplicación de la ley impugnada que en realidad guarda relación con determinar si las facultades en cuestión pertenecen al municipio, lo cual forma parte del fondo.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada del proyecto contenida en el considerando sexto, relativo a las causas de improcedencia, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Medina Mora Icaza, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

La señora Ministra ponente Luna Ramos realizó la presentación del considerando séptimo, relativo al estudio del concepto de invalidez. El proyecto propone desestimar el concepto de invalidez esgrimido en el sentido de que se viola el artículo 115, fracciones II y III, constitucional, obligando a la firma de un convenio para que los municipios puedan emitir los permisos para circular sin placas y sin tarjeta de circulación, tomando en cuenta la tesis P./J. 137/2001 en la cual se concluyó que si bien es cierto los municipios tienen la facultad de legislar reglamentariamente en materia de tránsito por las especificidades que como tales tienen en esta materia y en este servicio público, lo cierto es que ello no exime a la facultad que tiene la Legislatura de los Estados para emitir las leyes para regular de manera uniforme esta materia. Asimismo, se desestima el argumento concerniente a que se viola la autonomía presupuestal del municipio, ya que no se está vedando la posibilidad de cobrar los derechos respectivos, sino sencillamente se resuelve que la regulación establecida por parte del Congreso del Estado es válida para tener uniformidad dentro del propio Estado.

Modificó el proyecto para agregar el precedente de la controversia constitucional 18/2008, en la cual se diferenció entre tránsito y transporte, así como reforzar la página cuarenta y siete en referencia con el contenido de la Ley de Tránsito del Estado, con base en lo sugerido por el señor Ministro Medina Mora Icaza. Indicó que sopesaría lo atinente a eliminar el párrafo segundo de la página cuarenta y nueve.

El señor Ministro Cossío Díaz se manifestó en contra del proyecto porque estimó que el legislador estatal invadió las atribuciones municipales con el artículo 20 de la Ley de Tránsito del Estado, en razón de que el artículo 115, fracción III, inciso h), constitucional atribuye al Municipio la función y el servicio de tránsito. Recordó que en la controversia constitucional 18/2008 se resolvió que las legislaturas de los Estados debían limitarse a brindar un marco normativo homogéneo, en los ámbitos de registro y control de vehículos, reglas de autorización y circulación, emisión de placas, calcomanías y hologramas de identificación, reglas de expedición de licencias de manejo y otros requisitos necesarios para circular, por lo que resultan inconstitucionales las normas estatales que no concedan espacio suficiente a los municipios conforme a sus facultades constitucionales. A partir de esto, estimó que, en el caso, la Legislatura del Estado extrajo la competencia en materia de tránsito del municipio con el pretexto de generar una condición básica general en el Estado, atribuyéndose además dicha competencia con el artículo 1º de la citada ley. Indicó que no obstante la existencia de los precedentes de las controversias constitucionales 25/98, 104/2003 y 42/2005, en las cuales se determinó que el Estado y los municipios tienen competencias definidas y a partir de ellas celebran convenios, el artículo 20 materia de litis resulta inválido al extraer la competencia del municipio.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas concordó con el señor Ministro Cossío Díaz porque el

artículo 20 en estudio y su acto de aplicación invaden la esfera competencial del municipio en la materia, en la inteligencia de que del precedente de la controversia constitucional 6/2001 se desprende que existe una competencia constitucional de naturaleza legislativa en favor de los Estados para emitir normas que regulen la prestación del servicio de tránsito a fin de dar uniformidad en el territorio mediante un marco normativo homogéneo, sin embargo, ello no implica que el Estado pueda atribuirse facultades que pertenecen expresamente a los municipios de acuerdo con el artículo 115 constitucional, por lo que el supuesto de entrega de permisos para que los vehículos circulen sin placas y tarjetas de circulación corresponde constitucionalmente al municipio y, por ende, la norma emitida por el legislador estatal no puede hacer nugatorio el ejercicio pleno de las facultades del municipio mediante requisitos condicionantes, resultando entonces inválido dicho artículo 20 y, por consecuencia, el oficio aludido. Se reservó para, en su momento, pronunciarse en relación con la extensión de los efectos de invalidez a otras normas.

El señor Ministro Pérez Dayán se externó esencialmente de acuerdo con el proyecto porque el artículo 20 impugnado en nada demerita el ejercicio de la competencia constitucional del municipio. Consideró que el punto concreto de la controversia versó exclusivamente sobre los permisos para circular sin placas o tarjetas de circulación, por lo que debe tomarse en cuenta que la disposición que rige en todo orden jurídico es que los

vehículos se identifiquen a través de un sistema de emplacamiento que permita una certeza de quién los transporta, aunque deben prevenirse excepciones, las cuales también deben regirse homogéneamente. Estimó correcta la medida del artículo 20 en cita pues, si bien por su competencia constitucional los municipios pueden permitir circular a vehículos sin identificación alguna, se debe atender esta regla general para evitar ciertos aspectos negativos. Enfatizó que el municipio no combatió la restricción de una facultad constitucional, sino simplemente el someterse a la celebración de un convenio. Sugirió no realizar un pronunciamiento respecto de los engomados, reglas de registro y control de vehículos, calcomanías, hologramas y expedición de licencias, puesto que el punto concreto de la controversia radicó en los permisos para circular sin placas o tarjetas de circulación.

El señor Ministro Medina Mora Icaza se manifestó en favor del proyecto, concordando con los señores Ministros Luna Ramos y Pérez Dayán en la circunstancia excepcional y la necesidad de una regulación homogénea que procure seguridad vial pública, en el sentido de que genera certidumbre la identificación de quién circula. Aclaró que no es lo mismo la placa y el engomado que el permiso provisional.

La señora Ministra ponente Luna Ramos modificó el proyecto para agregar los precedentes de las controversias constitucionales 18/2008, 20/2008 y 22/2008, así como

precisar que la norma impugnada y el oficio constituyen el primer acto de aplicación, como le sugirió el señor Ministro Presidente Aguilar Morales de manera económica. Asimismo, modificó el proyecto para centrar el problema al control vehicular de placas de circulación, como sugirió el señor Ministro Pérez Dayán.

El señor Ministro Cossío Díaz advirtió que no es el punto considerar que cada municipio generará sus propias reglas. Aclaró que en los precedentes se interpretó que los Estados podrían generar disposiciones lo suficientemente amplias y homogéneas para que cada uno de los municipios, en términos de la fracción II del artículo 115 constitucional, pudiera adecuar sus propias condiciones vía normas reglamentarias y, a partir de ahí, celebrar convenios, lo cual distorsiona la competencia exclusiva del municipios del artículo 115, fracción III, inciso h), constitucional con el artículo 20 en análisis. Indicó que se provocaría una inconstitucionalidad cuando el municipio emita disposiciones reglamentarias que sobrepasen la homogeneidad de la legislación estatal. Por ello, se reiteró en contra del proyecto.

El señor Ministro Pérez Dayán manifestó su satisfacción con el proyecto tras la aceptación de la señora Ministra ponente Luna Ramos de su sugerencia.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea se expresó con el sentido del proyecto, pero externando dudas en su argumentación, puesto que no se trata de la materia de tránsito, sino de transporte, pues los documentos a que se

refiere el precepto en cuestión no guardan relación con la operación u organización del servicio de tránsito, sino que se trata de medios de identificación de los vehículos para poder circular. Estimó que la tesis derivada de la controversia constitucional 18/2008 de rubro *“TRÁNSITO Y TRANSPORTE. DIFERENCIA ENTRE ESOS CONCEPTOS ENTENDIDOS COMO MATERIAS COMPETENCIALES.”* definió suficientemente al primer concepto, no así al segundo, esto es, indicó que el servicio público de tránsito es la actividad técnica realizada directamente por la administración pública, encaminada a satisfacer la necesidad de carácter general de disfrutar de seguridad vial en la vía pública y poder circular por ella con fluidez como peatón, como conductor o como pasajero, mediante la adecuada regulación de la circulación de peatones, de animales y de vehículos, así como del estacionamiento de estos últimos en la vía pública, con lo que reiteró que en el caso no se trata de un tema de tránsito. Recordó que lo referente a las placas encuentra su regulación a nivel federal, pues el artículo 73, fracción XVIII, constitucional otorga al Congreso de la Unión la facultad de establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba tener, dictar reglas para determinar el valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un sistema general de pesas y medidas, que en el artículo 40, fracción XVI, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización se prevé que las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad establecer las características y/o especificaciones que deban reunir los

aparatos, redes y sistemas de comunicación, así como vehículos de transporte, equipos y servicios conexos para proteger las vías generales de comunicación y la seguridad de sus usuarios, y que existe una norma oficial mexicana que establece los requisitos que deben observar las placas metálicas, las calcomanías de identificación y las tarjetas de circulación, entre otros elementos, por lo que esa materia debe estar acorde no a las normas estatales, sino a las federales, con diferencias en cada uno de los niveles de gobierno. Recalcó que, en el caso, no se está ante un tema de tránsito porque no se regulan las condiciones necesarias para que se transite con seguridad y fluidez, sino los requisitos con que debe contar un vehículo para poder circular no sólo en el Estado, sino en el territorio nacional.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas estimó que la norma impugnada se refiere a aspectos operativos, como la expedición de los permisos conducentes, los cuales son de atribución municipal. Indicó, tras la lectura de la tesis derivada de la controversia constitucional 18/2008 de rubro “*SERVICIO PÚBLICO DE TRÁNSITO EN UN MUNICIPIO. ALCANCE DE LAS COMPETENCIAS NORMATIVAS ESTATALES Y MUNICIPALES EN SU PRESTACIÓN.*”, que las Legislaturas de los Estados pueden emitir en materia de tránsito un marco normativo homogéneo; sin embargo, una atribución constitucional del municipio es la aplicación de ese marco jurídico, por lo que sostuvo su opinión por la inconstitucionalidad del dispositivo legal en estudio.

El señor Ministro Cossío Díaz señaló que esa tesis refiere al servicio público de tránsito como al registro y control de vehículos, reglas de autorización de su circulación, emisión de placas, calcomanías y hologramas de identificación vehicular, reglas de expedición de licencias de manejo y otros requerimientos necesarios para que puedan circular, por lo que sí se trata de un tema de tránsito y no de transporte.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea consideró que el tema es de transporte, pero que si fuera de tránsito tendría razón la señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas en que se trata de uno de los supuestos en los cuales se requiere de una regulación general del Estado, pero al preverse en la norma impugnada una autoatribución de facultades a favor de un poder estatal, se decantaría por su invalidez. Recalcó que el tema es discutible, estimando que se trata de una regulación en materia de transporte. Adelantó que salvaría su óptica personal con un voto concurrente.

El señor Ministro Pérez Dayán indicó no haber participado en la votación de la tesis leída por la señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas, pero que la suscribiría totalmente, especialmente cuando afirma que deben existir facultades para homogeneizar este tipo de determinaciones, resaltando que en el caso sólo se combatió el mero hecho de celebrar un convenio, no su contenido.

El señor Ministro Silva Meza se expresó en favor del proyecto, indicando que es tenue la línea de distinción entre tránsito, transporte y control de vehículos derivado de los servicios de tránsito, estimando que el presente caso es este último supuesto, en el cual corresponde a la Legislatura estatal homogeneizar la regulación. Recordó que la controversia se derivó de la disposición atinente a la celebración de un convenio.

El señor Ministro Franco González Salas se pronunció en favor del proyecto.

La señora Ministra ponente Luna Ramos aclaró que la controversia constitucional 18/2008 derivó de un problema de transporte relacionado con las concesiones para el transporte público. Aclaró, con base en lo establecido en la tesis emanada de dicha controversia, que el servicio público de tránsito es la actividad técnica, realizada directamente por la administración pública, encaminada a satisfacer la necesidad de carácter general de disfrutar de seguridad vial en la vía pública y poder circular por ella con fluidez como peatón, como conductor o como pasajero, mediante la adecuada regulación de la circulación de peatones, de animales y de vehículos, así como del estacionamiento de estos últimos en la vía pública, y que el transporte es una actividad consistente en llevar personas o cosas de un punto a otro y se divide, en atención a sus usuarios, en público y privado y, en razón de su objeto, en transporte de pasajeros y de carga. Preciso que el precepto en cuestión prevé la

elaboración de un convenio para emitir los permisos para circular sin placas en todos los municipios a fin de homologarlos. Coincidió con el señor Ministro Pérez Dayán en que no se impugnó el convenio en cuanto a su extralimitación en algunas de las facultades. Refirió que el proyecto propone determinar que la competencia normativa estatal se extiende, entre otras cuestiones, al registro y control de los vehículos, así como sus reglas de autorización de circulación, lo que encuentra sustento en las tesis que se han mencionado.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas coincidió en que en esa controversia constitucional se trató el tema del transporte, sin embargo, en la tesis que derivó se le dio contenido al concepto de tránsito.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada del proyecto contenida en el considerando séptimo, relativo al estudio del concepto de invalidez, la cual se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea por razones distintas, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Medina Mora Icaza, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales. Los señores Ministros Cossío Díaz y Sánchez Cordero de García Villegas votaron en contra y anunciaron voto de minoría. El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea anunció voto concurrente.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales decretó un receso a las trece horas y reanudó la sesión a las trece horas con veinte minutos.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el asunto siguiente.

II. 549/2012

Contradicción de tesis 549/2012, suscitada entre la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver, respectivamente, los amparos en revisión 95/2011, 575/2011, 446/2011 y 284/2011, y el amparo en revisión 493/2012. En el proyecto formulado por el señor Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se propuso: *“PRIMERO. Sí existe la contradicción de tesis a que este expediente se refiere, en los términos del apartado VI de esta resolución. SEGUNDO. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. TERCERO. Dese publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resolución, en términos del artículo 220 de la Ley de Amparo.”* La tesis a que hace referencia el punto resolutivo segundo tiene por rubro *“ANTINOMIA JURÍDICA. NO LA GENERA EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 11, TERCER PÁRRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 22 Y 21, FRACCIÓN II DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA LOS EJERCICIOS 2010, 2011 Y 2012, RESPECTIVAMENTE.”*

El señor Ministro ponente Gutiérrez Ortiz Mena realizó la presentación del asunto. Preciso que el diferendo de criterios consiste en el alcance de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y la Ley de Ingresos de la Federación. Aclaró que el proyecto lo fundamentó con la Ley de Amparo vigente y no la anterior, aunque la denuncia haya sido en la vigencia de esta última, ello en atención al precedente de la contradicción de tesis 337/2013 de su propia ponencia. Sometió a la valoración del Tribunal Pleno los apartados procesales del proyecto.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la discusión en torno a los apartados I, II, III, IV y V, relativos, respectivamente, a los antecedentes, al trámite, a la competencia, a la legitimación y a los criterios de las Salas contendientes.

La señora Ministra Luna Ramos externó la duda alusiva a si en la ocasión anterior se tomó en cuenta el artículo transitorio tercero de la Ley de Amparo vigente, que indica que los juicios iniciados con anterioridad a la vigencia de dicha ley continuarían tramitándose hasta su resolución final con las disposiciones aplicables, aunque no exista un transitorio expreso relativo a las contradicciones de tesis.

El señor Ministro Cossío Díaz apuntó que, conforme al artículo transitorio primero de la Ley de Amparo vigente, y al no existir una disposición particular, se debe invocar la ley vigente al momento de resolverse.

La señora Ministra Luna Ramos, tras consultar su participación en el asunto que refirió el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena, adelantó que se separaría del apartado de competencia.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta de los apartados I, II, III, IV y V, relativos, respectivamente, a los antecedentes, al trámite, a la competencia, a la legitimación y a los criterios de las Salas contendientes, de la cual derivaron los siguientes resultados:

Respecto de los apartados I, II, IV y V, relativos, respectivamente, a los antecedentes, al trámite, a la legitimación y a los criterios de las Salas contendientes, se aprobaron por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Medina Mora Icaza, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

Por lo que ve al apartado III, relativo a la competencia, se aprobó por mayoría de siete votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Medina Mora Icaza, Sánchez Cordero de García Villegas y Pérez Dayán. Los señores Ministros Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea y Presidente Aguilar Morales votaron en contra.

El señor Ministro ponente Gutiérrez Ortiz Mena realizó la presentación del apartado VI, relativo a la existencia de la contradicción. El proyecto propone determinar su existencia pues ambas Salas respondieron de manera distinta a la pregunta ¿existe antinomia entre lo establecido en el artículo 11, párrafo tercero, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y las Leyes de Ingresos de la Federación para los Ejercicios Fiscales de dos mil diez y dos mil once, artículos 22 y 21, respectivamente, al considerar que el primer dispositivo legal permite el acreditamiento del crédito IETU como regla general hacia el futuro y los dos restantes lo impiden como una regla específica por lo que concierne a los referidos ejercicios fiscales?. Al respecto, la Primera Sala concluyó que no existe esa antinomia a partir de un análisis autónomo del artículo 22 en cita con el diverso 11, párrafo tercero, mientras que la Segunda Sala, partiendo de un análisis integral de las leyes de ingresos concluyó que sí existe antinomia, lo que genera incertidumbre jurídica a los contribuyentes del impuesto.

El señor Ministro Pérez Dayán recordó que la Segunda Sala abandonó un criterio sostenido en distintos asuntos por una cuestión de seguridad jurídica, estableciendo la inadmisibilidad de que una ley, en determinado momento, modificara aspectos sustantivos de otra, aun cuando se trate de una ley de ingresos, lo cual genera una antinomia evidente que viola un principio constitucional en materia de recaudación; sin embargo, posteriormente se resolvieron otros asuntos con una nueva integración y con un criterio

muy semejante al de la Primera Sala, en el entendido de que, respecto de la anualidad de las contribuciones, la ley de ingresos sí podía privar de eficacia alguna disposición de las leyes anteriores, lo que no provoca inseguridad jurídica. Con esto, manifestó duda sobre si existe realmente la contradicción de criterios.

El señor Ministro Pardo Rebolledo recapituló que la Primera Sala, al analizar la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil diez y la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, concluyó que no existía una antinomia entre estas leyes porque la de ingresos, si bien prohibía el acreditamiento de los saldos a favor que se tuvieran en el citado impuesto, solamente lo restringía para el ejercicio de dos mil diez; por otro lado, la Segunda Sala analizó el problema desde una perspectiva distinta porque partió de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil once, determinando que era evidente la intención del legislador de eliminar o derogar la norma que permitía el beneficio de la ley del impuesto de marras. Estimó entonces que la Primera Sala no se ha pronunciado respecto de los ejercicios subsecuentes al ejercicio fiscal de dos mil diez, por lo que no se acredita la existencia de la contradicción de tesis.

La señora Ministra Luna Ramos recapituló que la Segunda Sala emitió un criterio con base en la resolución del amparo en revisión 817/2010, similar al externado por la Primera Sala, en el entendido de que no existía

incongruencia entre las leyes apuntadas; sin embargo, con motivo de la resolución del amparo en revisión 493/2012 y con una nueva reflexión, se abandonó expresamente el anterior criterio y concluyó que sí se violaba el principio de seguridad jurídica. Después, al analizar dos casos con la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil doce y la Ley del Impuesto Sobre la Renta relativos a la aplicación de la tasa del 30%, se afirmó que sí era posible establecer una derogación en la ley de ingresos y que no era violatorio del principio de seguridad jurídica ni del de proporcionalidad porque coincidía con otra tesis de rubro *“LEYES DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN. LA DEROGACIÓN REALIZADA EN ALGUNO DE SUS PRECEPTOS, RESPECTO DE UNA O MÁS DISPOSICIONES, TIENE EFECTOS PERMANENTES Y SU VIGENCIA NO SE LIMITA AL RESPECTIVO EJERCICIO FISCAL.”* En el caso de los artículos 11, párrafo tercero, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y 22 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil diez, indicó que la Primera Sala consideró que, únicamente para ese ejercicio fiscal, no debe realizarse la acreditación correspondiente, mientras que la Segunda Sala, tras un cambio de criterio, estimó que sí presenta un problema de seguridad jurídica, máxime que las abrogaciones o derogaciones de las leyes de ingresos pueden ser permanentes, aunado a que los artículos transitorios de ambos ordenamientos no prevén nada al respecto. Por esta razón, valoró que sí hay contradicción de

criterios y que, respecto del cambio de criterio a que refería el señor Ministro Pérez Dayán, la Segunda Sala no partió del mismo supuesto ni del mismo impuesto, lo que no implica abandono de criterio.

El señor Ministro ponente Gutiérrez Ortiz Mena sostuvo el proyecto porque, si bien coincidió con algunas observaciones del señor Ministro Pérez Dayán, formalmente no se ha abandonado el criterio en análisis. Por lo que ve a lo expresado por el señor Ministro Pardo Rebolledo, indicó que la Segunda Sala, al resolver el amparo en revisión 493/2012, explícitamente abandonó el criterio similar al de la Primera Sala y sostuvo uno nuevo, por lo que subsiste la contradicción.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales coincidió con el señor Ministro Pardo Rebolledo en que la perspectiva de estudio de las Salas se hizo desde ejercicios fiscales diferenciados; siendo que la Segunda Sala, al resolver el amparo en revisión 493/2012, estableció que la intención del legislador tributario fue derogar tácitamente el mecanismo de acreditamiento opcional previsto en el artículo 11, párrafo tercero, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, pues no la sujetó a un período determinado ni indicó que fuera aplicable únicamente para el ejercicio fiscal de dos mil diez. Por eso, estimó que pudiera no existir la contradicción de tesis, sin embargo, podría resultar útil la fijación de un criterio del Tribunal Pleno respecto de las posturas de ambas

Salas, por lo que sería conveniente entrar al estudio del fondo.

La señora Ministra Luna Ramos advirtió que los artículos 22, 21 y 21 de las Leyes de Ingresos de la Federación para los Ejercicios Fiscales, respectivamente, de dos mil diez, dos mil once y dos mil doce son textualmente iguales, por lo que el problema subsiste.

El señor Ministro Pérez Dayán, con base en lo expresado por el señor Ministro Pardo Rebolledo indicó que no existe contradicción, en la inteligencia de que la Segunda Sala tomó una decisión al estudiar tres ejercicios fiscales, resolviendo que no produce inseguridad jurídica, sin que se haya variado dicho criterio.

El señor Ministro Franco González Salas consideró que se trata de ópticas jurídicas diferentes que llevaron a decisiones diferenciadas. Recordó que cuando se analizó el primer asunto en la Segunda Sala, se concluyó que se podía resolver aplicando los principios en materia tributaria, y en el segundo asunto se estudiaron tres ejercicios fiscales, a partir de los cuales la norma permaneció por haberla mantenido el legislador. Adelantó que, de ser necesario, explicaría su postura y se expresó en favor de la existencia de la contradicción.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del apartado VI, relativo a la existencia de la contradicción, la cual se aprobó por mayoría de nueve

votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Silva Meza, Medina Mora Icaza, Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Aguilar Morales por consideraciones diversas. Los señores Ministros Pardo Rebolledo y Pérez Dayán votaron en contra. El señor Ministro Presidente Aguilar Morales anunció voto concurrente.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales acordó prorrogar el estudio del asunto para la siguiente sesión y que continúe en lista.

Acto continuo, levantó la sesión a las catorce horas con cinco minutos, previa convocatoria que emitió a los integrantes del Pleno para acudir a la sesión pública ordinaria que se celebrará el lunes veintitrés de marzo de dos mil quince, a las once horas.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, quien da fe.